

# **REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FRENTE AL POSCONFLICTO**

**DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA**

**Monografía**

**Asesor**

**Mg. Édgar Augusto Arana Montoya**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  
FACULTAD DE DERECHO  
DIRECCIÓN DE POSGRADOS  
ESPECIALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO COHORTE 10  
PEREIRA  
2017**

**REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO VICTIMAS DE LA  
VIOLENCIA FRENTE AL POSCONFLICTO**

**DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA**

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL  
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO**

**Mg. Édgar Augusto Arana Montoya**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA  
ESPECIALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO  
OCTUBRE DE 2017  
PEREIRA, RISARALDA  
2017**

## NOTA DE ACEPTACIÓN

---

---

---

---

---

**ASESOR**

---

**JURADO**

---

**JURADO**

**Pereira, Risaralda, octubre de 2017**

## **CONTENIDO**

	<b>pág.</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>5</b>
<b>1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>7</b>
<b>2. JUSTIFICACIÓN</b>	<b>10</b>
<b>3. OBJETIVOS</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Objetivo General</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Objetivos Específicos</b>	<b>12</b>
<b>4. MARCO REFERENCIAL</b>	<b>13</b>
<b>4.1 Marco Histórico</b>	<b>13</b>
<b>4.2 Marco Teórico</b>	<b>15</b>
<b>4.2.1 Desarrollo Temático</b>	<b>17</b>
<b>4.3 Marco Jurídico</b>	<b>23</b>
<b>4.4 Marco Conceptual</b>	<b>24</b>
<b>4.5 Estado del Arte</b>	<b>28</b>
<b>5. DISEÑO METODOLÓGICO</b>	<b>32</b>
<b>5.1 Tipo de Investigación</b>	<b>32</b>
<b>5.2 Método de Investigación</b>	<b>32</b>
<b>5.3 Fuentes de Información</b>	<b>32</b>
<b>6. PERSONAL INVESTIGATIVO</b>	<b>33</b>
<b>7. PRESUPUESTO</b>	<b>34</b>
<b>8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS</b>	<b>36</b>
<b>9. CRONOGRAMA</b>	<b>37</b>
<b>10. CONCLUSIONES</b>	<b>38</b>
<b>11. BIBLIOGRAFIA</b>	<b>40</b>

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la propuesta investigativa sobre los niños@s víctimas del reclutamiento forzado, su reconocimiento y reparación como víctimas frente a la justicia transicional en Colombia, tiene un gran sentido de relevancia social, jurídica y política, toda vez que el conflicto armado colombiano con más de seis décadas ha sido episodio de grandes vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario, a los Derechos Humanos, y peor aún que ha sido evidente el reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de los grupos insurgentes, es importante que frente al tema de los diálogos de paz que se llevan a cabo en la Habana Cuba por parte del Gobierno Nacional y el grupo narcoterrorista de las FARC, se trate un tema de alta relevancia social, jurídica, y de alto contenido constitucional y administrativo como es el reconocimiento y reparación de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos guerrilleros, que va en contra de los preceptos de la Constitución Política de Colombia que promulga, que los intereses de este grupo es de especial protección por parte del Estado.

En la actualidad, en donde el tema en medios de comunicación y el discurso frecuente del Gobierno Nacional es la Paz con los grupos insurgentes, se debe dar gran importancia al tema de los niños y niñas víctimas del conflicto armado, ya que es el grupo de especial protección por parte del Estado que debe ser priorizado en cuanto a medidas constitucionales, administrativas y de política social para salvaguardar sus derechos y más aún cuando estos han sido vulnerados, por lo tanto el desarrollo del proyecto investigativo, debe centrarse en estos aspectos como eje central y para resaltar su importancia como propuesta investigativa y académica que atañe tanto a profesionales del derecho, litigantes, doctrinantes y a las mismas Altas Cortes, así como también a los organismos internacionales y facilitadores del proceso de paz, y en especial a las víctimas más vulnerables, los niños y niñas y a sus familias, que tienen

derecho a que sean reconocidos y reparados como víctimas inocentes de un conflicto que no es de ellos.

Como propuesta investigativa y académica que atañe tanto a profesionales del derecho, litigantes, doctrinantes y a las mismas Altas Cortes, así como también a los organismos internacionales y facilitadores del proceso de paz, y en especial a las víctimas más vulnerables, los niños y niñas y a sus familias, que tienen derecho a que sean reconocidos y reparados como víctimas inocentes de un conflicto que no es de ellos, el tema es de alta relevancia ya que para el posconflicto se deben aplicar medidas y procedimientos en materia de política pública y de reparación integral para esta población que ha sido victimizada por causa de los actores en el conflicto armado colombiano.

## **1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

La reparación administrativa a las víctimas del conflicto armado interno es una obligación inexorable por parte del Estado Colombiano, donde los niños, niñas han hecho parte del mismo, siendo garantía y deber para el mismo los instrumentos internacionales establecidos, siempre buscando el respeto de los derechos humanos.

Es así que el Estado ha optado por los mecanismos de justicia transicional para hacer frente a un contexto de graves y masivas violaciones a las normas internacionales de derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Siendo la obligación de reparar, en el contexto transicional hacia la paz y la vivencia de una verdadera democracia, destacándose tres puntos fundamentales a saber: el ideal de la reparación integral debe analizarse teniendo en cuenta que, por su naturaleza, las violaciones cometidas en el marco de un conflicto armado interno, vulnerabilidad de los derechos de niños y niñas como víctimas del mismo, actuar que en muchos casos ya es irreparable; las reparaciones enmarcadas en un contexto de transición hacia la paz, el cual no se reduce únicamente a indemnizaciones, ya que se habla de restitución, satisfacción, garantías de no repetición y por último, poder hablar de una flexibilidad del derecho a la reparación en favor de la realización de otros derechos, con un fin determinado que es la paz y la convivencia, donde es importante analizar el número de víctimas afectadas, principalmente y como objeto de estudio los niños y niñas, el carácter sistemático o masivo de las violaciones y la capacidad real del Estado mismo para enfrentar la consecuencias mismas del post conflicto.

Podemos decir que la administración ejercida por parte del Estado en la última década ha propiciado una germinación de mecanismos de atención y reparación masiva a las víctimas del conflicto armado en el País, donde se han considerado que

tales mecanismos son absolutamente indispensables para lograr la reconciliación y paz de forma paulatina a mediano plazo, donde, se pueden situar a los niños y niñas víctimas del conflicto dentro del eje fundamental de las políticas públicas de paz. Sin embargo, el poder abordar y reconocer el tema de la reparación de daños en un contexto excepcionalmente masivo de violencia implica complejas situaciones que el Estado nunca ha asumido en la historia del conflicto armado dentro su nivel jurídico-político.

Entonces, la sociedad y el Estado se preguntan en torno a qué justicia se debe aplicar sin perder de vista el fundamento como Estado Social de Derecho. Donde, la sociedad cuestiona al Estado sobre las medidas excepcionales de justicia y de reparación que se vienen implementando, muy al margen de la tradición jurídica del derecho del daño, y el Estado mismo enfrenta una escasez de tipo fiscal al momento de resarcir a las víctimas de un conflicto armado interno, surgiendo el cuestionamiento si debe realizar reparación a todas las víctimas del conflicto armado y en este caso a los niños y niñas, cuantificando los daños materiales e inmateriales sufridos, como lo haría la jurisprudencia de tipo contencioso/administrativa dentro de los contextos ordinarios de generación de daños atribuidos al Estado por acción o por omisión.

Es así que, podemos considerar de qué manera el Estado ha optado por un proceso de justicia transicional, la cual implica una serie de mecanismos jurídicos y no jurídicos para afrontar las consecuencias de un pasado de graves violaciones a los derechos humanos a los niños y niñas, además del restablecimiento o reparación de perjuicios a las víctimas supone el acceso a la verdad, la re-dignificación, la integración a la vida social y productiva, las solicitudes de perdón y otras medidas de reparación las cuales trascienden la noción ordinaria del derecho del daño.



Por lo anterior, hacemos la siguiente pregunta de investigación: ***¿Cuál será la eficacia y veracidad de los programas públicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y reparación de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos insurgentes, frente a la justicia transicional, y el posconflicto en Colombia?***

## 2. JUSTIFICACIÓN

Todo Colombiano, sea padre, hermano, familiar o demasiado cercano a este fenómeno, debe entender que después de meses y meses de diálogos, una parte de la mesa de negociación (proceso realizado en la Habana, Cuba), no ha querido reconocer que son victimarios, ni de mujeres, niños, niñas y que por el contrario son víctimas de un Estado que los ha relegado. Pero la gran mayoría de los colombianos, entendemos que por desigual, no incluyente y por más corrupción y desigualdades sociales que existan, los primeros y que requieren de máxima protección son los niños y niñas, por qué entonces, ¿dónde quedará el futuro de cualquier país, nación o Estado Democrático social y de Derecho donde no se les proteja y se les brinde todas las garantías constitucionales y administrativas al futuro social y de unión familiar como primer elemento de todo Estado, la familia, los niños, ellos son la paz. Y si no se les reconoce en primera medida por los victimarios como tales, será posible que exista una paz verdadera o la existencia o perduración de un posconflicto?

El deber de reparar por parte del Estado debe abordarse necesariamente ligado a otros aspectos tales como el social, al hablar de un Estado Social de Derecho en Colombia, donde, la reparación integral como principio, el principio de igualdad y los mecanismos excepcionales de justicia transicional y post conflicto son fundamental en todo momento. Procurando a través de los mismos encontrar acertadamente su contexto “ideal de justicia”, enmarcado en un conflicto armado interno de más de medio siglo, trascendiendo las limitadas barreras del derecho de daños, que propende por la mera indemnización, hacia una justicia restauradora, en la que la finalidad esencial ha de ser la transformación del entorno vital de las víctimas, en este caso, los niños y niñas; lo cual implica su inclusión integral en la vida social y política a través de medidas integrales del Estado y de los ciudadanos, cerrando las brechas de marginalidad, desprotección y pobreza.

Cuando hablamos de niños como víctimas de la violencia en el conflicto armado interno, podemos ver como se han adoptado medidas enmarcadas a subsanar la complejidad de este flagelo. Una de las evidencias del mismo inicialmente es la adopción de la ley 12 de 1991, para proteger los derechos del niño, generada por las Naciones Unidas y tras varios años es necesario implementar el código de infancia y adolescencia a través de la ley 1098 de 2006, que busca garantizar a los niños y niñas el desarrollo con un ambiente de felicidad en medio de la sociedad que se desenvuelven.

A través del auto 251 de 2008, en la sentencia T-025, la Corte Constitucional, buscar mostrar los riesgos a los que se exponen los niños y las niñas que se han encontrado en situación de desplazamiento.

En todo este proceso, el ICBF, es el encargado de realizar acciones de acompañamiento para el bien de los menores implicados. El Estado Colombiano, no se limitó a delegar esto a dicha institución descentralizada, ya que a través del artículo 181 de la ley, ley 1448 de 2011, adquiere un compromiso para beneficiar a los menores víctimas de violencia en el conflicto armado, demostrando derechos como: a la verdad, la justicia y la reparación integral; al restablecimiento de sus derechos prevalentes y a la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia sexual.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1. Objetivo General**

Establecer la eficacia y veracidad de los programas públicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y reparación de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos insurgentes, frente a la justicia transicional y el posconflicto.

#### **3.2. Objetivos Específicos**

- Analizar la situación de los niños y niñas víctimas del conflicto armado colombiano y las medidas administrativas que se aplican en la actualidad para el restablecimiento de sus derechos.
- Reconocer el fundamento normativo, constitucional y administrativo sobre la protección y reparación integral de niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado en Colombia.
- Analizar las políticas y programas públicos y administrativos para la reparación integral de los niños y niñas víctimas de las violencias tendientes a su aplicación en la justicia transicional y posconflicto

## **4. MARCO REFERENCIAL**

### **4.1 Marco Histórico**

Para poder comprender el tema del conflicto armado en nuestro país y el postconflicto, es necesario mencionar que el mismo inició a principios de la década de los 60's, donde los principales actores involucrados han sido el Estado, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha.

Han pasado varias etapas de recrudecimiento, principalmente en los años 80's cuando algunos de los actores comenzaron a financiarse a través del narcotráfico, presentando un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimación generalizada que produce la guerrilla en algunas regiones del país, debido a asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los grupos paramilitares que surgían y los narcotraficantes que chocaban con estos grupos por el dominio en el desarrollo de sus actividades delincuenciales.

A partir de 1990, se aumenta el conflicto donde las tomas armadas en distintas poblaciones, desapariciones forzadas, masacres indiscriminadas de civiles, militares y políticos, tácticas de guerra y reclutamiento forzado de menores, es el pan diario, y con ello el accionar del Estado a través de los gobiernos de Andrés Pastrana y el inicio de Álvaro Uribe, influyen en ese accionar. Donde surge la desmovilización de grupos paramilitares entre el 2003 y 2006, debilitamiento de la guerrilla y descenso de la intensidad del conflicto. No obstante, las diferentes estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que empiezan a comportarse como las Bacrim. Para esto se tomaron medidas en el gobierno de Juan Manuel Santos, en las mesas de diálogos con las FARC en Cuba, donde uno de los temas más sonados y complejos es la reparación

administrativa de los niños, niñas como víctimas de la violencia frente al tema de posconflicto.

El 22 de abril de 2008, el Gobierno Nacional expide el decreto 12907, creando con este el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos al margen de la ley, cuyo fin es la reconciliación, donde el 27 de mayo de 2009 el Ministerio del Interior y de justicia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Acción Social expiden un comunicado anunciando que el inicio de estas reparaciones por vía administrativa fueron a víctimas de minas antipersonal, menores reclutados forzosamente y hechos confesados por victimarios en el proceso de justicia y paz.

En junio del mismo año se iniciaron las reparaciones administrativas a víctimas de minas antipersonal, menores reclutados forzosamente y hechos confesados por victimarios en el proceso de justicia y paz.

Colombia es el país pionero en el mundo en la aplicación de justicia transicional pese de que continua con el accionar terrorista. Con base en el principio de solidaridad, a partir de 2008 las víctimas que no han recibido la reparación administrativa pueden solicitarla sin importar la fecha del hecho victimizante. Pero las priorizadas por el comité de reparaciones administrativas serán: víctimas de minas antipersonales, menores reclutados forzosamente por grupos ilegales, y los de reparación por hechos confesados ante las unidades de justicia y paz de la fiscalía, así como de los familiares de las víctimas que fueron encontrados en fosas comunes.

## 4.2 Marco Teórico

En este aparte, es importante comenzar por el interrogante, ¿Es eficiente la respuesta del Estado Colombiano a las situaciones sociales y reales de vulneración de derechos frente a la Infancia y adolescencia? Para lo cual resulta de trascendencia decir que En algunos casos existen programas que aunque sirven como mecanismos indirectos de prevención no están dirigidos hacia tal fin y mucho menos focalizados hacia los sectores más vulnerables, como lo plantean la Convención Internacional de los Derechos del Niño, La Ley 1098 de 2006 e incluso la Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011)

Pese a que de conformidad con el objeto de la Ley 1098 de 2006, dentro del marco de la protección integral, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, es evidente que el primer aspecto que debe ser abordado y uno de los más importantes es la prevención de la amenaza o vulneración de estos derechos, que permita reducir los factores que conduzcan a la comisión del delito.

Y aunque esta obligación está en cabeza del Gobierno Nacional, a través de la acción de los entes territoriales, de la Policía Nacional y del ICBF y está expresamente consignada en el Código de Infancia y Adolescencia y en el artículo 95 de la Ley 1453 de 2011 entre otros instrumentos legales, en la mayoría de las ciudades son muy escasos los programas que se están adelantando López B (2010) y en otros es prácticamente nulo el trabajo que se está haciendo en cuanto a la prevención de la delincuencia.

En un contexto particular de posconflicto, o en los procesos de transición de una situación de conflicto a una situación de paz, con todas las implicaciones que esto tiene, se hace necesaria una definición de desarrollo entendido desde un enfoque de derechos humanos. Así las cosas, podemos entender el desarrollo como todos aquellos procesos cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Es fundamental aclarar que no sólo se trata de un crecimiento económico, sino de la necesidad de establecer las condiciones para que cada individuo desarrolle al máximo sus capacidades y potencialidades.

El Gobierno Nacional definió la estrategia integral para un eventual postconflicto. El proyecto constituye un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyos pilares son la paz, la equidad y la educación, plantea la reconstrucción del tejido social desde las regiones, sobre todo aquellas más afectadas por cinco décadas de conflicto armado interno. “La tarea central en esa dirección es crear la arquitectura y las políticas que lleven al fin sostenible del conflicto armado y a la garantía de la no repetición, con un esfuerzo constante del Estado y en particular de la Fuerza Pública para asegurar el orden constitucional, garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza y sentar las bases para el desarrollo económico y social del país en la próxima década.

También se destaca que para garantizar una paz estable y duradera se requiere del mejoramiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas, “las cuales se mantendrán a la ofensiva contra los grupos que persistan en su accionar violento, y liderarán el desarme y la desmovilización de los combatientes y redes de apoyo de grupos ilegales, al tiempo que garantizarán la protección de la ciudadanía”. Las siguientes son las principales acciones que de cara a un eventual postconflicto contempla el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’: reintegración, política antidrogas, desmovilización, reparación a las víctimas y convivencia y seguridad. El sector rural Siendo el campo colombiano el más afectado por el conflicto armado interno, el Plan Nacional de Desarrollo prevé varias acciones que implican la



territorialización y articulación de las entidades estatales competentes para hacer efectivos los derechos de sus habitantes.

Cifras de la Agencia Nacional para la Reintegración señalan que hasta finales de 2014 se habían desmovilizado 57.000 personas, incluyendo desmovilizados individuales de la guerrilla: Farc, 18.000; ELN, 4.000. Mientras que las desmovilizaciones colectivas: 36.000, en especial de las ex Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.Reintegración En este aspecto, la acción gubernamental estará orientada al desarme, desmovilización y reinserción mediante campañas en las regiones, donde se concentra el accionar de los grupos al margen de la ley y la judicialización y captura de los ejecutores del reclutamiento y utilización de niños y adolescentes. “El éxito de este proceso define la posibilidad de que las personas que decidan dejar las armas, encuentren condiciones para vivir dignamente en la legalidad y contribuyan a la paz, la seguridad y la convivencia”

Convivencia y Seguridad Para el Gobierno, afianzar la transición hacia la paz implica otras acciones como la lucha contra las principales modalidades delictivas en las ciudades, la consolidación del número 123 de emergencias, el aumento del pie de fuerza de la Policía y mejoramiento de su equipamiento, además de la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley.

#### **4.2.1 Desarrollo Temático**

Comenzaremos diciendo que los niños y niñas, aunque poseen derechos establecidos en la Constitución Política de 1991, han sido víctimas del conflicto armado interno al sufrir múltiples violaciones al presenciar actos contras sus familiares (desplazamiento, muerte, etc), y lo más grave, siendo reclutados para ser parte activa

de las filas de los grupos alzados en armas. Los flagelos a los cuales han sido sometidos los menores son los siguientes:

**1. desplazamiento forzado:** Considerado como el principal hecho victimizante hacia los menores de edad. La cifra es muy alta (94%), los menores son obligados a salir de sus lugares de origen debido a amenazas directas a su vida o por despojo de las tierras de ellos y sus familiares directos.

**2. reclutamiento forzado:** Según la Secretaría Técnica de la Comisión interseccional para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados al margen de la ley, se define como “la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años de edad a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delictivos organizados , que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen y es de naturaleza colectiva”.

Según Amnistía Internacional en Colombia para el año 2011, hay entre 8.000 y 13.000 niñ@s soldados, con edades promedio de 13 años, provenientes de 29 de los 32 departamentos del país. Además de los denominados niñ@s soldados, se reclutan niños por bandas criminales, donde la cifra al año 2011 fueron 131 casos los que se conocieron. Ambos casos demuestran que estos pequeños tienen bajo nivel de escolaridad, por las circunstancias vivieron menor tiempo al lado de sus padres, tienen mayor existencia de cicatrices, amputaciones, discapacidades y síntomas de enfermedad.

Además, durante el reclutamiento forzado, se presenta otro fenómeno, ser víctimas de minas antipersonales, donde sus consecuencias van desde amputación de alguno de sus miembros hasta la muerte, y en la mayoría de los casos discapacidad motriz.

**3. Orfandad:** A través de la ley 1448 de 2001, artículo 188, se estableció que los niñ@s huérfanos son considerados víctimas en razón de la muerte de sus padres a causa del conflicto armado interno. Y teniendo otras consecuencias como violación de derechos como cuidado, custodia, educación, salud, desarrollo integral de su primera infancia.

**4. Violencia sexual:** donde se ve desde acceso carnal violento, explotación sexual, embarazos y abortos forzados. Las niñas son las más afectadas, ya que los miembros que conforman los grupos alzados en armas las utilizan sexualmente, convirtiéndolas en algunos casos en compañeras permanentes, generando a corto, mediano y largo plazo secuelas psicológicas y/o físicas, que van desde embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, lesiones genitales y donde se les impide acudir en casos severos a las autoridades médicas.

En el auto 092 de 2008, la Corte Constitucional ha dicho al respecto: *“la incidencia de actos de violencia sexual en el marco del conflicto armado contra niñas ha ido en aumento, y que los casos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado en los que menores de edad son víctimas ocupan una porción desmesurada del universo total de víctimas conocidas”*

Para poder combatir los anteriores flagelos, se han realizado algunos espacios/escenarios de inclusión, como:

- \* Consejos municipales de la política económica y social
- \* Consejos de desarrollo rural

- \* Mesas de infancia y adolescencia
- \* Comités de seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia
- \* Comités territoriales de discapacidad.
- \* Mesas en Contra del abuso de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
- \* Mesas de prevención de reclutamiento
- \* Hogares Gestores del ICBF

A través del tiempo se ha venido entonces implementando medidas de prevención, protección, reparación integral, garantías de no repetición para los niños víctimas del conflicto armado interno en Colombia, entre ellas podemos ver, según informe del ICBF:

1. Unificar los procesos de caracterización de niños y niñas víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta su pertenencia a grupos étnicos, identidad de género, orientación sexual diversa, condición de discapacidad, impacto de los diferentes hechos victimizantes y lugar de origen.
2. Promover procesos de reconstrucción de memoria histórica orientados a generar garantías de no repetición de los hechos.
3. Armonización de los sistemas de información con la Red Nacional de Información de la Unidad para las víctimas
4. Promover campañas de sensibilización con entidades locales y organizaciones étnicas para el desarrollo de acción para la protección y prevención urgente.
5. Crear protocolos para garantizar la confidencialidad de la información y entrenar al personal para que aseguren que toda la información suministrada por niños liberados se mantenga confidencial, con el fin de prevenir riesgos de seguridad o represalias.

6. Formar a las fuerzas militares sobre Derecho Internacional Humanitario.
7. Diagnosticar las necesidades de rehabilitación física y salud mental en relación al hecho victimizante para niñas y niños, en el marco de la implementación del programa de atención sicosocial y salud integral a víctimas.
8. Priorizar proyectos en zonas afectadas por el conflicto armado dirigidos a la disminución del riesgo de reclutamiento.

Con respecto a la **Rehabilitación**, garantizar el acceso preferencial de los niños y niñas víctimas en atención sicosocial individual, familiar y comunitaria y la prestación de servicios de salud integral, incluida la atención en salud mental.

En el tema de **Restitución**, se realizará procesos pedagógicos para la restitución en los territorios detectados que fueron desplazados.

Y en el tema de **satisfacción**, promover la participación de niños y niñas en los procesos de reconstrucción de memoria histórica. Generando mecanismos de articulación de las iniciativas de museos y casas de la memoria, con participación de los niños víctimas a nivel local.

Para finalizar, queremos recordar que la estructura planteada para el proceso de paz contiene tres fases: exploratoria, fin de conflicto y construcción de paz.

Según el artículo del diario El tiempo del 1 de septiembre de 2016 *“El proceso que comenzó el 10 de septiembre de 2016, para desvincular a los menores de edad de las filas de las FARC impone el reto de atender a esta población como víctimas del conflicto armado y no como victimarios”. ...”Cada 33.2 horas hubo una vinculación de*

*niñas y niños al conflicto en el país, ...de cada 1.000 colombianos 28 han sido víctimas de delitos sexuales...cada 97.14 minutos hay una víctima de desaparición forzada en Colombia”...*

Datos sobre reclutamiento de los menores al año 2016: la edad promedio de reclutamiento forzoso son los 13 años, donde alrededor de unos 6.000 menores de edad se han desmovilizado de los grupos armados desde 1999 a marzo de 2016; el 71% niños y 29% niñas. Las FARC y las AUC son las organizaciones que más menores reclutan.



### 4.3 Marco Jurídico

- Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 60/147. Donde se determinen los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
- ACNUDH, “Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programas de reparaciones”, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra (2008)
- Constitución Política 1991
- Ley 975 de 2005 Ley de justicia y paz
- Decreto 4690 de 2007, prevención de reclutamiento y utilización de niñ@s, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley
- Ley 1424 de 2010, ley de contribución a la verdad y la memoria histórica
- Decreto 4800 de 2011, consistente en la reglamentación de cada una de las medidas de asistencia, atención y reparación para las víctimas. (normativa y operativa)
- Ley 1448 de 2001, art 188, trata sobre los niñ@s, adolescentes huérfanos son considerados víctimas en razón de la muerte de sus padres a causa del conflicto armado interno

#### **4.4 Marco Conceptual**

##### **\* JUSTICIA TRANSICIONAL:**

Se entiende por Justicia Transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales y/o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad para garantizar que los responsables de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, rindan cuentas de los actos cometidos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras de los grupos alzados en armas, con un fin único de lograr la reconciliación nacional y una paz duradera y sostenible.

##### **\* CONFLICTO ARMADO:**

Dentro del marco del derecho internacional humanitario, existen diferentes acepciones del concepto de conflicto armado interno; donde, en primer lugar, conflictos armados internacionales que se presentan cuando se recurre a la fuerza armada entre dos o más estados; y conflictos armados no internacionales, que ocurren entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. Los conflictos armados no internacionales se consideran enfrentamientos dentro de un territorio estatal entre el Gobierno y grupos armados.

En síntesis, podemos afirmar que se entienden por conflicto armado interno el enfrentamiento armado prolongado que ocurre entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos mismos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El enfrentamiento



armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima.

**\* PAZ:**

Es uno de los mayores objetivos estratégicos de la denominada justicia transicional. En un primer momento se ligaba el surgimiento del concepto de paz al concepto de guerra, pues ambos aparecen casi que de manera simultánea.

El concepto de paz se desarrolló como la ausencia de guerra o situación de no conflicto. Este concepto, denominado también paz negativa, era entendido como *“la ausencia de guerra o de manifestaciones de violencia directa, en cuanto al daño de la integridad física de las personas, y externa, en cuanto que la causa era un ejército exterior”*.

Posteriormente surge el concepto de paz positiva, considerada el resultado de una construcción consciente de una paz basada en la justicia, generadora de valores positivos y perdurables, capaz de integrar política y socialmente, además de contemplar la satisfacción de las necesidades humanas.

**\* VICTIMA:** La RAE define víctima como:

1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.
2. f. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.
3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.
4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.

5. f. Der. Persona que padece las consecuencias dañosas de un delito.  
(RAE, 2016)

Según el Código Civil, en el entendido que, desde su creación tuvo como parámetro la comisión del delito y su receptor la víctima, como lo expresa en el art. 5 al establecer que “no es necesario que la ley que manda, prohíbe o permita, contenga o exprese en sí misma la pena o castigo en que se incurre por su violación”

A través de la Ley 1448 de 2011, en su artículo 3 definió a las víctimas como:

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, *ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Ley 1448, 2011).*

#### **\* REPARACIÓN:**

La reparación a la víctima no se limita solamente al tipo económico, también hay otras maneras de reparar como el reconocimiento de la verdad, actos culturales, perdón, actos interinstitucionales, entre otros.

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, entre ellos éste, el tribunal internacional determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados. Es

necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso<sup>31</sup> [118]. Es un principio de Derecho Internacional general que la obligación de reparar no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando su derecho interno, principio constantemente recogido en la jurisprudencia de la Corte (CIDH, 2006, P.63).

#### **\* INDEMNIZACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA:**

Para esta indemnización, serán incluidos todos los hechos victimizantes y se establecerá un procedimiento especial para evitar que las víctimas con derechos se queden por fuera del proceso de indemnización y que personas sin derechos sean incluidas en el sistema injustamente.

El procedimiento mediante el cual se otorgará la indemnización administrativa no distingue a las personas dependiendo del victimario.

#### **\* INFANCIA /NIÑEZ**

Según la UNICEF, el término Niñez es aquel período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad, a los 13 años, cuando se dará paso a la siguiente etapa de la vida, la adolescencia. Entonces, hasta esta edad la persona será considerada como un niño/a.

## 4.5 Estado del Arte

Al realizarse una consulta de publicaciones que tengan que ver con el tema de los niños@s víctimas del reclutamiento forzado y su reconocimiento y reparación como víctimas frente a la Justicia Transicional en Colombia, se encuentran algunas investigaciones y artículos que hablan sobre el conflicto armado en el país, sobre la violencia y victimización de niños y mujeres, así como también sobre la justicia transicional y la reparación a las víctimas en general, es decir que las víctimas son reconocidas por el Estado como tales, en la justicia transicional pero en la gran mayoría no se discrimina el género de la víctima, ni la clase de delito.

En el repositorio de la Universidad Libre de Bogotá, se encuentra el trabajo de grado con el título “Conflicto armado colombiano niños y adolescentes vinculados” con autoría de Carlos Andrés Forero Muñoz Rafael Andrés Cortés Castellanos en el año 2012 para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en esta publicación se resalta que trata de dar respuesta a problemáticas como ¿Es el niño guerrillero y armado una víctima o un victimario?,

“¿Se deben judicializar estos menores o darles prerrogativas para una mejor vida en sociedad?, es todo lo que el Estado se pregunta para decidir y ejecutar su objeto, para este caso en concreto, es el de glorificar los principios constitucionales y la razón de ser del Estado social y democrático de Derecho”

En el Informe Secretaria General Naciones Unidas, 2004, Referente al tema de justicia transicional, debe anotarse:

“El concepto justicia transicional hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien

sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz” (Uprimny, Botero, Restrepo & Saffón, 2006, pág. 13).

Pero este concepto evolucionó “como un campo que busca calificar la transición con base en consideraciones de justicia” (Lyons, 2010, pág. 15 en Informe Secretaria General Naciones Unidas, 2004, pág. 616)

Lo que aclara este concepto es que la justicia transicional es un paso de un momento histórico, social o político que ha generado un deterioro a los derechos de un grupo de personas y que busca mediante esta transformación que se llegue a la justicia.

De igual manera, se encuentra que de acuerdo al documento llamado, “La niñez y sus derechos” (Boletín No. 8), la Defensoría del Pueblo, en virtud del desarrollo del programa “Sistema de Seguimiento y vigilancia de los Derechos Humanos de la Niñez en Colombia”, impulsado a través del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha sido un participante activo frente al problema, ya que ha adelantado investigaciones de campo, propiamente en acción o ejecución de su misión, la cual es verificar cómo se desarrollan y cuál es la evolución de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes vinculados con los grupos alzados en armas al margen de la ley que participan del conflicto armado interno, e igualmente de aquellos que se han desvinculado de dichos grupos<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> “La niñez y sus derechos” (Boletín No. 8). En <http://www.unicef.org/colombia/conocimiento/boletn-8.htm>.

Por otro lado en lo referente a antecedentes investigativos sobre el tema, se puede encontrar en el artículo desarrollado con base en investigación para trabajo de grado- para la Universidad Santiago de Cali, con el título “La Justicia Transicional en Colombia: Los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la política de Santos” (Valdivieso Collazos, 2012 p 25); que el autor revisa la aplicación de la justicia transicional en Colombia a la Luz del Derecho internacional humanitario y los Derechos humanos.

Es así que el autor en mención (Collazos 2012) al analizar la aplicación de ley de víctimas afirma con respecto a la aplicación de los estándares internacionales dice lo siguiente:

*“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras toma gran relevancia en dos aspectos: por un lado, para que Colombia cumpla con su deber internacional de reparar a las víctimas del conflicto armado y, por otro, proyecta la creación de un escenario de respeto hacia los estándares internacionales de derechos humanos, situación que es favorable para la inserción del país en el sistema internacional como un actor político relevante respetuoso de las normas. En ese sentido, la ley, además, permite una mejor adecuación de la legislación interna con los regímenes internacionales de DDHH y de DIH”.*(Collazos, Andrés Mauricio; 2012 pág.26 )<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> VALDIVIESO Collazos, Andrés Mauricio. (2012) La justicia transicional en Colombia: Los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la política de Santos. Pap.polit. [online].vol.17, n.2, pp. 621-653. ISSN 0122-4409 o <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v17n2/v17n2a09.pdf> )

Lo anterior se puede comparar en unísono con lo que dice Martell, L. (2007) en el artículo publicado con el título "La Tercera Ola en teoría de la globalización ", en el cual se hace un desglose documental sobre el comportamiento histórico de Colombia frente al desarrollo del régimen internacional de los derechos humanos y estándares internacionales para el manejo de los conflictos armados y la reparación a las víctimas.

## **5. DISEÑO METODOLÓGICO**

### **6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

Esta investigación es de carácter socio jurídica, de tipo descriptivo cualitativo, ya que busca establecer la eficacia y veracidad de las políticas públicas y administrativas que garanticen el reconocimiento y reparación de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos insurgentes, frente a la justicia transicional, y el posconflicto en Colombia.

### **6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN**

Su desarrollo se realizará bajo el enfoque hermenéutico, histórico y con un diseño de investigación deductivo analítico ya que se busca analizar la eficacia de las políticas públicas y administrativas para la reparación integral y restablecimiento de los derechos de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado y la violencia frente a la justicia transicional y el posconflicto en Colombia.

### **6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN**

La información proviene del análisis de documentos e investigaciones que hablan sobre el tema en Colombia



## 6. PERSONAL INVESTIGATIVO

Nombre del investigador	Formación Académica	Función dentro del Proyecto	Dedicación Horas/Semana	TOTAL
Estudiante <b>Dolly Celmira Perea Montoya</b>	Estudiante de Especialización en Derecho Administrativo	Investigador <b>Dolly Celmira Perea Montoya</b>	3 horas	Cada hora vale \$50.000 se multiplican por el total \$ 150.000
Docente <b>Édgar Augusto Arana Montoya</b>	Profesional en	Asesor <b>Édgar Augusto Arana Montoya</b>	2 horas	

## 7. PRESUPUESTO

<b>UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA</b>
<b>FORMATO DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>

<b>PROGRAMA ACADÉMICO: Especialización en Derecho Administrativo Cohorte 10</b>	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FRENTE AL POSCONFLICTO.</b>	
<b>GASTOS ACADÉMICOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Arrendamientos Equipos	-0-
Contribuciones y Afiliaciones	-0-
Seguros transporte de estudiantes	-0-
Servicio de Teléfono	-0-
Transportes, Fletes y Acarreos	-0-
Publicidad, Propaganda y Promoción	-0-
Servicio de Encuadernación y Empaste	65.000
Gastos de Viaje	1.500.000
Alojamiento y Manutención	600.000
Viáticos	920.000
Pasajes Aéreos	-0-
Pasajes Terrestres	1.240.000
Suscripciones Periódicos y Revistas	-0-
Útiles, Papelería y Fotocopias	255.000
Taxis Y Buses	114.000
Casino Y Restaurante	370.000
Elementos Computador Y Telecomunicaciones.	121.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.185.000</b>

INVERSIONES	
Bases de Datos Bibliotecas Virtuales	-0-
Publicaciones de libros y revistas	-0-
Capacitación a Docentes	-0-
Libros para la Biblioteca (Fisicos y digitales)	230.000
Programas para Computador (Software)	-0-
Vestuarios y Uniformes	-0-
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL GASTOS MAS INVERSIONES</b>	<b>5.415.000</b>

**Investigador: DOLLY CELMIRA PEREA MONTOYA**

## 8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

### Generación de nuevo conocimiento

RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Monografía completa	Publicación página web de la unilibre	Comunidad jurídica y académica unilibre y en general
Formación académica para todos los integrantes	Trabajo de grado, estudiantes investigadores	Auxiliares de investigación

### Apropiación social del conocimiento

RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Ponencia regional	Ponencia en jornada regional de Derecho	Comunidad jurídica y académica en general
Ponencia nacional	Ponencia en jornada nacional de Derecho	Comunidad jurídica y académica en general

## 9. CRONOGRAMA

<b>MES</b> <b>ACTIVIDAD</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCT</b>	<b>DICIEM</b>
<b>SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA</b>	X					
<b>EVALUACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN</b>		X				
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PREGUNTA, LOS OBJETIVOS Y LA JUSTIFICACIÓN</b>		X				
<b>PROPUESTA METODOLÓGICA</b>		X				
<b>DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO</b>			X	X		
<b>PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y APROBACIÓN</b>				X	X	
<b>DESARROLLO DEL PROYECTO.</b>				X	X	

## 10. CONCLUSIONES

El comportamiento que conlleva actualmente el proceso de paz ha sido de vital importancia para las menores involucrados en el conflicto armado, quienes han sufrido con mayor impacto el flagelo de la guerra al ser separados de sus familias, no permitiéndoles tener un desarrollo en sociedad “normal”. Por lo cual, el acuerdo de paz genera tranquilidad en la comunidad que ha sufrido este fenómeno de una guerra interna que se ha extendido por más de 50 años.

La reparación integral a los niños y niñas como víctimas del conflicto armado, durante el periodo del posconflicto como respuesta de no impunidad, debe estar reglamentado a través de la normatividad, interinstitucional y socio-cultural, donde se logre la inclusión tanto del sector público como del privado, en el desarrollo de políticas públicas proyectos, programas y estrategias que permitan la materialización de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.

Cabe resaltar nuevamente este artículo, donde se entiende el RETO de desvinculación de los menores, cifras que según los expertos son inferiores a las que son de los menores involucrados en el conflicto armado:

“El proceso que comenzó el 10 de septiembre de 2016, para desvincular a los menores de edad de las filas de las FARC impone el reto de atender a esta población como víctimas del conflicto armado y no como victimarios” (El Tiempo, 11 de septiembre, p.6).

En cuanto a datos se reportan: la edad promedio de reclutamiento forzoso son los 13 años. Unos 6.000 menores de edad se han desmovilizado de los grupos armados desde 1999 a marzo de 2016; de ellos el 71% niño y 29% niñas. Las FARC y

las AUC son las organizaciones que más menores reclutan.

Comprobamos que las medidas de reparación, justicia y verdad acogidas en la normativa colombiana han sido realmente eficientes, ya que permean los mecanismos y herramientas necesarios para desarrollarlos.

La Ley 1448 de 2011 permite trabajar armónicamente con la implementación del nuevo acuerdo y las futuras normativas que se expidan en relación a dicha implementación donde se puede ver el acompañamiento y beneficio como víctima que es el menor reclutado y su proceso de reintegrarse a la sociedad.

Vemos como limitante el desconocimiento por parte de las FARC, como grupo alzado en armas a desmovilizarse de la cantidad de menores de edad que componen actualmente sus filas, cuantos han perdido la vida, para que el Gobierno Nacional tome medidas en el proceso de paz, dándole garantías de reintegración a la vida civil, junto con acompañamiento psicológico, reencuentro con su familia, estudio o empleo, entre otros

## 11. BIBLIOGRAFIA

CARREÑO SAMANIEGO, Pedro A. (2007) Violencia Intrafamiliar, en FORENSIS CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. (2004) Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia, Bogotá,

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2006. Ley 1098 de 2006. Artículo 7 Código de la infancia y la adolescencia

CÓDIGO DEL MENOR, 1989.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1989.

DEFENSORIA DEL PUEBLO. (2001) Informe Defensorial Niñez y Conflicto Armado. Informe Defensorial

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2007) Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. Bogotá.

ICBF (2007). Lineamientos técnicos para el marco general y orientaciones de políticas públicas y planes territoriales en materia de infancia y adolescencia. Documento No. LM10. PN13, Bogotá.

LÓPEZ BETANCUR Manuel Enrique (2010) Cualificación del SRPA y política pública de infancia y adolescencia. Bogotá.



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (2009), Colombia: Niñas, niños y adolescentes felices y con igualdad de oportunidades. Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019. Bogotá: DNP, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Unicef y Unfpa.

MONTERO Tomás 2014. Recopilación. Justicia Juvenil Instrumentos internacionales Universidad Libre – Seccional Pereira Maestría en Derecho Penal Seminario Justicia Juvenil Restaurativa 11 al 13 de septiembre de 2014 Recopilación realizada por: Tomás Montero ([www.paip.es](http://www.paip.es))

UNICEF y Alianza por la niñez colombiana (2007). Código de la Infancia y la Adolescencia. Versión comentada. Bogotá. p. 17.

## **WEBGRAFÍA**

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional Consultado septiembre de 2014 en [http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/27\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/27_sp.htm).

<http://www.elpais.com.co/judicial/estrategias-para-el-postconflicto-definidas-en-el-plan-de-desarrollo.html>